

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N° 70

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad pública, en el proceso ordinario laboral interpuesto por la señora **MARIA SORMERIDA CIFUENTES** contra **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2213 de junio de 2022, la presente decisión se realiza de manera escrita.

Se reconoce personería para actuar en representación de **COLPENSIONES** a la Dra. **FANCY ANITH MARIN GUTIERREZ**, identificada con C.C. 43.566.730 y T.P. 226.035 del C. S. de la J., a quien le fue sustituido el poder por el Dr. **FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI**, identificado con CC 71.379.806 y T.P. 198.214 del C. S. de la J.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se condene a la entidad al reconocimiento de la pensión de vejez conforme al régimen general de pensiones del art. 33 de la ley 100 de 1993, modificada por la 797 de 2003.

Tiene derecho a los intereses moratorios consagrados en el art. 141 de la ley 100 de 1993 o la indexación de las condenas.

Hechos

Indicó la actora que nació el 27 de septiembre de 1959, cumplió 57 años el mismo día y mes del año 2016.

Laboró para la ESE Hospital de la Cruz, para el periodo entre 20 de octubre de 1989 y el 12 de mayo de 2005.

Se encuentra afiliada a Colpensiones, entidad que por medio de la Resolución SUB146270 del 31 de mayo de 2018 le negó la pensión de vejez por no acreditar requisitos para acceder a la misma.

Posteriormente el 27 de febrero de 2019 por medio de la SUB143249 del 6 de junio de 2019 le reconoció 1232 semanas cotizadas en toda la vida laboral y por lo tanto negó el derecho reclamado, lo cual confirmó en el acto administrativo DEP8250 del 21 de agosto de 2019.

La historia laboral presenta varias inconsistencias, en razón a que para el periodo 20 de octubre de 1989 al 12 de agosto de 2005 únicamente tomó 741.31 cuando en realidad son 813.28 en la ESE Hospital de la Cruz, las que al ser sumas con las que reconoce la entidad serian 1303.20 acreditando así el derecho reclamado.

Del mismo modo el Hospital la Cruz del Municipio de Puerto Berrio inició pagos a Colpensiones y también a Porvenir S.A., y no fueron contabilizados esos periodos.

Tampoco se contabilizaron periodos que la actora cotizó como independiente como marzo a mayo de 2006 a octubre de 2007, por 34.24 semanas, noviembre de 2007 a junio de 2008, por 34.24 semanas y septiembre a noviembre de 2008 por 12.84 semanas.

Colpensiones no ha realizado actualización de la historia laboral o cobro coactivo en caso de semanas en mora, si existen como es su deber, al realizar correctamente el cálculo de las semanas que se dejaron de contabilizar se tiene que la demandante cuenta con 1397 semanas.

La última cotización al sistema general de pensiones fue para el ciclo enero de 2019 y se reclamó el 27 de febrero de 2019.

Contestación Colpensiones

Entidad que a través de apoderada manifestó que, en general son cierto los hechos de demanda, sin embargo, la actora debe probar que acredita requisitos para acceder a la pensión de vejez, toda vez que para la entidad no cuenta con los mismos.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, improcedencia de los intereses moratorios del art improcedencia de la indexación, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

Sentencia de primera instancia

El Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín en sentencia del **17 enero de 2023**, declaró que la actora acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez, en razón a que Colpensiones no contabilizó de manera correcta las semanas y el tiempo de servicio de ésta, quien acredita las 1300 que la norma le exige.

Condenó a Colpensiones a pagar pensión de vejez en los términos del art. 33 de la ley 100 de 1997 modificada por la 797 de 2003, liquidó la prestación a partir del 1° de febrero de 2019 y hasta el mes de enero de 2023, sobre un salario mínimo legal mensual y 13 mesadas, lo que ascendió a un retroactivo de \$47.319.609, autorizando además los descuentos en salud correspondientes.

De otro lado condenó al reconocimiento de los intereses de mora desde el 28 de agosto de 2019 y el momento del pago de la obligación.

La decisión adoptada fue recurrida por la entidad y se conocer también en el grado de consulta a favor de la misma.

Recurso Colpensiones:

La demandada por intermedio de apoderada manifestó no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el a quo, en razón a que por medio de la Resolución emitida en el año 2018 se le dijo a la afiliada que no acreditaba los requisitos para acceder a la pensión de vejez que solicitó, porque únicamente cotizó en toda la vida laboral 1231 semanas y se exige 1300.

Las inconsistencias son reflejadas por el Hospital la Cruz Municipio de Puerto Berrio al RAIS y Colpensiones no arregla dichas inconsistencias, por eso le dijo a ella que reclamara, sin que sea competencia de la entidad modificar la historia laboral que diga la AFP.

Entonces al contar con una acumulado de semanas de 1231, es claro que no puede ser reconocida la pensión.

Respecto de los intereses moratorios es importante tener en cuenta que no operan de pleno derecho, porque proceden es cuando concurren dos elementos como son, que haya una pensión reconocida y se entre en mora en el reconocimiento de mesadas, lo que para el caso no ha ocurrido.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en la ley 2213 de junio de 2022. Sin alegatos.

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia de conformidad el recurso y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones: serán: (i) Determinar si la actora acredita los requisitos para ser acreedora a la pensión de vejez; bajo los parámetros del art. 33 de la ley 100 de 1993 modificado por la 797 de 2003, (ii) en caso afirmativo revisar monto, fecha de disfrute, liquidación del retroactivo, así mismo si proceden los intereses moratorios establecidos en el art. 141 de la ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La señora **María Somnerida Cifuentes nació el 27 de septiembre de 1959.**
2. Laboró para la ESE Hospital la Cruz Municipio de Puerto Berrio entre el 20 de octubre de 1989 y 12 de agosto de 2005.
3. Reclamó ante Colpensiones el 27 de febrero 2019 y fue negada por medio de la Resolución SUB143249 del 6 de junio de 2019, reconociendo 1232 semanas en toda la vida laboral y confirmada por medio de acto administrativo DPE8250 de agosto de 2019.
4. En toda la vida laboral cuenta con 1314 semanas, según las pruebas obrantes en el expediente.

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

Del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003

El artículo 9 de la Ley 797 de 2003 establece que tendrán derecho a la pensión de vejez, las afiliadas mujeres que reúnan las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido 55 años. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementó la edad a 57 años.
2. 1000 semanas de cotización, incrementadas a 1050 a partir del 1 de enero de 2005, y en los años sucesivos a partir del 1 de enero de 2006 en 25 semanas hasta alcanzar en 2015 un número de 1300 semanas.

En el caso de la señora María Sormerida Cifuentes no está en discusión que cuenta con la edad requerida como es 57 años, toda vez que nació el 27 de septiembre de 1959 cumpliendo con este requisito el mismo día y mes de 2016.

Por lo tanto, la Sala centra su atención en verificar si efectivamente la actora acredita la densidad de cotizaciones de 1300 o en efecto le asiste razón a la entidad demandada.

Lo primero que se destaca de la prueba arrimada al proceso es que la actora laboró al servicio de la ESE Hospital de la Cruz Puerto Berrio Antioquia entre el 20 de octubre de 1989 y el 12 de agosto de 2005, lo cual se observa del certificado formato 1-2 y 3 B de la entidad, lo que equivale a 5715 días o 816.43 semanas.

Ahora bien, de la historia laboral aportada se tiene que realizó cotizaciones como independiente para el periodo septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, enero y febrero de 2006, noviembre a junio de 2008, enero y febrero de 2009.

En febrero de 2009 comenzó como con el empleador Cooperativa de Trabajo Asociado Nacional hasta enero de 2010, toda vez que en mayo de 2011 vuelve a hacer aportes como independiente hasta enero de 2019, salvo enero a julio de 2012 donde no registra cotizaciones.

De acuerdo al estudio de la historia laboral de la actora se tiene que esos periodos que no fueron contabilizados con la entidad suman 497.29 semanas y en total con las reconocidas por la entidad arriba a 1314 en toda la vida laboral.

Vemos frente al caso de la actora que las inconsistencias que llevan a la negativa de la prestación, que encuentra la entidad, según los actos administrativos aportados, es frente al tiempo laborado en el Hospital la Cruz

Municipio de Puerto Berrio, porque Colpensiones en la historia laboral contabiliza menos días al certificado por ese empleador, pues aparecen periodos como cotizados al RAIS y que este hubiere devuelto esos aportes a la entidad.

Frente al tema encuentra la Sala que en los asuntos donde se deben resolver de manera administrativa no tienen por qué ser cargados a la afiliada para concluir que no acredita los requisitos para acceder a la prestación, toda vez que el trabajador prestó sus servicios de buena fe o principio de confianza legítima.

Frente a este tema es importante traer a colación lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia como **T588 de 2014** que es del siguiente tenor:

El principio de buena fe, en virtud del cual los particulares y la Administración deben ajustar sus comportamientos a una conducta leal, honesta y conforme a las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta, se encuentra ligado al principio de la confianza legítima. En efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte, un corolario de la buena fe consiste, en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego ya establecidas que regulaban sus relaciones con los particulares, postulado esencial del concepto de la confianza legítima, pues este principio busca amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo. Además de lo anterior, se concluye que, de conformidad con el principio de la confianza legítima, la Administración se encuentra obligada a actuar conforme al respeto por el acto propio. Así, las autoridades deben actuar de manera coherente con sus comportamientos pasados y, en consecuencia, no pueden modificar sus actuaciones de manera abrupta en detrimento directo de los intereses o derechos de un particular.

Para la Sala no es admisible el argumento que da la entidad en los actos administrativos que niegan la prestación, como en el recurso interpuesto, bajo el argumento que por políticas internas de Colpensiones no hace reclamación a los periodos de cotización efectuados al RAIS y que fueron motivo de traslado, cuando es clara la información de tiempo laborado por la actora para la Empresa Social del Estado Hospital Santa Cruz, máxime cuando la afiliada ha realizado diversas solicitud con el fin de que se corrija su historia laboral poniendo de presente esas inconsistencia y aportando toda la prueba con las certificaciones laborales, tal como quedó claro en este proceso.

En la sentencia **SU182 de 2019** la Corte Constitucional dijo lo siguiente sobre la información del trabajador:

Los deberes de custodia y correcta administración de la información laboral

Tanto el empleador, como las administradoras de pensiones, son responsables de almacenar correctamente la información que reposa en su poder sobre la historia laboral de una persona. Ello, de manera que los ciudadanos interesados puedan acceder oportunamente a esta, presentar correcciones o solicitar certificaciones para realizar trámites legales.

En el caso del empleador, el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) señala como una de sus obligaciones especiales: “Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado”. En esta misma dirección, el artículo 264 establece que “las empresas obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus archivos los datos que permitan establecer de manera precisa el tiempo de servicio de sus trabajadores y los salarios devengados”.

“Lo anterior, quiere decir que históricamente ha estado en cabeza del Estado y de las entidades públicas que lo conforman, la administración y custodia de los archivos y documentos que les son propios y, a partir de la creación del Archivo General de la Nación, esa función se debe desarrollar siguiendo las directrices establecidas por este // La importancia de tal función está dada por la necesidad de mantener un registro de los hechos o sucesos de carácter administrativo, económico, político y, en general, en todos los ámbitos de la administración y, a la vez, documentar históricamente las situaciones que en esas esferas se han presentado y las personas e instituciones que han sido partícipes de ellas, pues, dan cuenta de situaciones tan trascendentales como las relaciones laborales entre los diferentes entes estatales y sus servidores”.

Pero los empleadores, sean públicos o privados, no son los únicos responsables de velar por la correcta custodia de la historia laboral de sus trabajadores. Sobre las administradoras de pensiones también recae una obligación mayúscula. Lo anterior, por cuanto los datos allí consignados han de ser sean completos y veraces, y reflejar el “verdadero esfuerzo económico que realizó el potencial beneficiario de la pensión en aras de la satisfacción de las condiciones legales para acceder a ella”¹. Según la jurisprudencia de esta Corte, hay cuatro obligaciones principales de las administradoras de pensiones, que se derivan del deber general de custodia sobre la información laboral. Estas obligaciones pueden resumirse de la siguiente manera:

“(i) el deber de custodiar, conservar y guardar la información y los documentos que soportan las cotizaciones, que hace referencia al especial cuidado que deben tener las entidades al organizar y manipular las historias laborales; (ii) la obligación de consignar información cierta, precisa, fidedigna y actualizada en las historias laborales, que se enfoca en las características mínimas que deben reunir los datos contenidos en los registros laborales; (iii) el deber de brindar respuestas oportunas y completas a las solicitudes de información, corrección o actualización de la historia laboral que formulen los afiliados al Sistema General de Pensiones, lo anterior porque en el marco de garantizar la veracidad de la información, en caso de que ésta sea inexacta, se debe garantizar la oportunidad y los canales adecuados para que los interesados presenten sus peticiones de corrección y sean respondidas en debida forma; y (iv) la obligación del respeto del acto propio, que se torna en una protección al trabajador cuando la entidad modifica la información de sus cotizaciones de forma intempestiva”

Las posibles fallas de las administradoras, desde el punto de vista operacional, “no puede traducirse en una denegación del derecho a la seguridad social del ciudadano que tiene la expectativa legítima de pensionarse”. En efecto, es a través de aquella información que se constata el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación económica por el riesgo de vejez, así como otras manifestaciones del derecho a la seguridad social. La desorganización, la no sistematización de los datos o el descuido, no pueden repercutir negativamente en contra del trabajador. De ahí que estas entidades deban actuar diligentemente, y cuando se presenten inconsistencias o solicitudes de corrección por parte del propio afiliado, es su deber “desplegar las actuaciones pertinentes que conduzcan a la corrección de cualquier información errónea o inexacta, pues de lo contrario se vulneraría el derecho al habeas data al negarle al titular del derecho la posibilidad de que dichos datos sean corregidos o complementados”.

Dicho lo anterior, es indiscutible que hay una obligación, tanto en el empleador como en las administradoras de pensiones, de velar por la correcta custodia, almacenamiento y disposición de los medios documentales que contengan información relevante sobre la trayectoria laboral de una persona, sea en el sector público o privado. Sin embargo, como también se observa en las disposiciones citadas, no hay claridad sobre el alcance del deber de custodia de la información laboral y los deberes específicos que se derivan para cada uno de los responsables. Tampoco existe un término preciso en el tiempo para mantener estos registros, ni pautas específicas sobre cómo conservar tales archivos de una forma idónea. Colpensiones ha avanzado en la dirección correcta a través de un programa interno de gestión documental, pero en el caso de los empleadores, la situación es mucho más compleja, pues ni siquiera hay un marco normativo que especifique y adecuadamente responda a estos deberes. Esta indeterminación es grave, pues la inadecuada conservación, e incluso la destrucción de archivos físicos por el paso del tiempo, ha tejido un manto de duda sobre las reclamaciones pensionales de miles de trabajadores, ante la imposibilidad de obtener un certificado de trabajo, o frente a las inconsistencias en los reportes que emiten las administradoras de pensiones.

Así mismo frente a periodos que no pudieron ser convalidados por encontrarse en mora, también contaba la entidad con las acciones de cobro coactivo para conseguir su pago y sino hace uso de este no es posible trasladar a la afiliada su obligación con la negativa de un derecho que está completamente probado.

Por los argumentos anteriores para la sala es claro que la actora si acredita el cumulo de semanas cotizadas para el caso 1314 en toda su vida laboral y en esa medida se **Confirmará** el fallo en este aspecto apelado.

De la desafiliación del sistema como requisito para el reconocimiento del derecho al pago del retroactivo pensional.

Al respecto se debe recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 el retiro del sistema es un requisito previo para disfrutar del pago de la pensión, condición que se desprende con claridad de la literalidad de la norma, pese a ello esta conclusión en principio lógica no corresponde con la razonabilidad de ciertos casos particulares.

Y es que, dadas las diferentes situaciones de los afiliados al sistema y los principios propios de la seguridad social, la interpretación textual no resulta ser la más satisfactoria.

Para este fin la jurisprudencia ha elaborado una regla hermenéutica que consulta la realidad del caso, que consiste en establecer a partir de los hechos la intención del afiliado. En este contexto conductas como el cese definitivo de cotizaciones o la reclamación de la pensión tienen una verdadera relevancia.

Acerca de esta lectura disímil de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, se pronunció la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-5603 de 6 de abril de 2016, oportunidad en la que indicó:

“Este ejercicio de búsqueda de soluciones proporcionales y coherentes valorativamente, no implica una transgresión a las reglas metodológicas de interpretación jurídica. Antes bien, parte del correcto entendimiento que la

utilización de las reglas interpretativas excluye su aplicación aislada y descontextualizada de los elementos externos. Además, en el sistema legal, la hermenéutica jurídica no se agota en la gramática o el análisis del lenguaje de los textos, pues existen otros métodos igualmente válidos que deben ser conjugados y armonizados para desentrañar el contenido de las disposiciones legales.

En este sentido, mal haría el juzgador, excusado en que la norma es «clara» y en la idea errada subyacente de la infalibilidad del legislador, llegar a soluciones abiertamente incompatibles y desalineadas frente a lo que constituye el marco axiológico del ordenamiento jurídico. Por esto, un adecuado ejercicio hermenéutico debe integrar las distintas reglas de interpretación y los factores relevantes de cada caso, en procura de ofrecer soluciones aceptables y satisfactorias”.

Y en sentencia de SL900 rad. 44017 de 2018 MP Jorge Luis Quiroz Alemán, dijo la Corte.

“Le asiste razón a la recurrente en el reparo a la interpretación de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, porque el tribunal introduce el concepto de prueba solemne al acto de desafiliación, desbordando el contenido de la norma e ignorando el alcance dado por la jurisprudencia, que ha aceptado incluso la noción de desafiliación tácita, como, por ejemplo, en la sentencia SL 9036-2017, Rad. 49877, nov. 21 de 2017.”

En ese orden, se tiene que la demandante nació el 27 de septiembre de 1959, es decir, que arribó a los 57 años de edad el mismo día y mes del año 2016, así mismo acredita su última cotización para el ciclo enero de 2019, por tanto, su pensión debió ser reconocida a partir del día siguiente a la dicha fecha, es decir, 1° de febrero de 2019, tal como acertadamente lo dijo el Juez de primera instancia. Confirma este aspecto consultado.

De la cuantía de la prestación

En cuanto al IBL el Juez de instancia encontró que se acreditó inferior al salario mínimo legal y lo ajustó a este, este aspecto no fue tema de apelación, por tanto, será la base con la cual la Sala revise la suma liquidada por el a quo, encontrando que entre el 1° de febrero de 2019 y el mes de enero de 2023 a la demandante se le adeuda la suma de \$47.319.609, suma igual a la que encontró el a quo, por tanto, se confirma este aspecto consultado.

De la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Respecto a este aspecto considera la apelante que no son procedentes porque únicamente deben ser reconocidos cuando existe una pensión ya otorgada y se entra en mora en su reconocimiento.

Lo primero que menciona la Sala es que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia los intereses de mora aplican para todo tipo de pensiones, véase la sentencia **SL 1681 del 2020** radicado 75127 MP Clara Cecilia Dueñas y reiterada en la **3130 de 2020** la Corte concluyó lo siguiente:

...Si bien las pensiones del régimen de transición se rigen en tres aspectos puntuales (edad, tiempo de servicios o semanas y monto) por las reglas anteriores, en todo lo demás les aplica la Ley 100 de 1993. Debido a ello, se trata de pensiones englobadas en el sistema general de pensiones, cuyas condiciones de causación son más flexibles o favorables que las del resto de pensionados...

Con lo anterior, la Sala abandona su criterio jurisprudencial anterior y, en su lugar, postula que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

En consecuencia, el Tribunal no erró al conceder en favor de Jairo Carrillo Amaya los intereses moratorios Radicación n.º 75127 SCLAJPT-10 V.00 18 mencionados, pero por las razones acá expuestas. Lo anterior, en la medida que la pensión otorgada al demandante es de estirpe legal (L. 71 de 1988), y fue concedida en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 199...

De otro lado la Corte Suprema ha manifestado que los intereses moratorios no se aplican de manera automática, sino que se debe establecer si la entidad enmarca dentro de algunos de los eximentes que tiene establecidos esa Corporación. Sentencia SL370 de 2020 y SL1020 de 2022.

En el caso que ocupa la atención de la Sala lejos de encontrarse un eximente para la administradora, lo que se encontró fue un proceder negligente frente al derecho a la actora, valga decir, negar reiteradamente una prestación cuando cumple a cabalidad con los requisitos para acceder a la misma y por situaciones de orden administrativo que en nada la exime de estar en mora.

En este sentido es claro como lo encontró probado el juez de instancia que debe condenarse a la administradora publica a pagar a la demandante intereses moratorios que para el caso se configuran 4 meses posteriores, en el caso el a quo los reconoció a partir del 28 de agosto de 2019 y aunque esto es 6 meses desde la reclamación que fue el 27 de febrero de 2019, la Sala confirma porque este aspecto se revisa en consulta a favor de Colpensiones y no es posible modificar.

De la excepción de prescripción

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la reclamación fue realizada el 27 de febrero de 2019 y se interpuso la demanda el 13 de febrero de 2020, sin que se configure la prescripción del art. 151 CPT y SS y 488 de CST.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de la demandante. Las agencias en derecho se estiman en \$1.160.000.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia proferida por el Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el día **17 de enero de 2022**, en el proceso ordinario laboral adelantado por **MARIA SORMERIDA CIFUENTES** contra **COLPENSIONES.**, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva de esta sentencia.

Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de la demandante. Las agencias en derecho se estiman en \$1.160.000.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ

Radicado: 05001-31-05-014-2020-00070-01
Radicado interno: P0523
Asunto: Confirma sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	María Sormerida Cifuentes
Demandado (s)	Colpensiones.
Radicado	05001-31-05-014-2020-00070-01
Decisión	Confirma
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 31 de marzo de 2023 a las 8:00am

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 31 de marzo de 2023 a las 5:00pm